

**TRIBUNA CULTURAL** El autor advierte de que la iniciativa parlamentaria de Izquierda-Ezkerra para cambiar el contenido del Museo del Carlismo no debiera cometer el error de reparar una injusticia histórica con otra injusticia histórica

# La represión de boina roja

Manuel Martorell



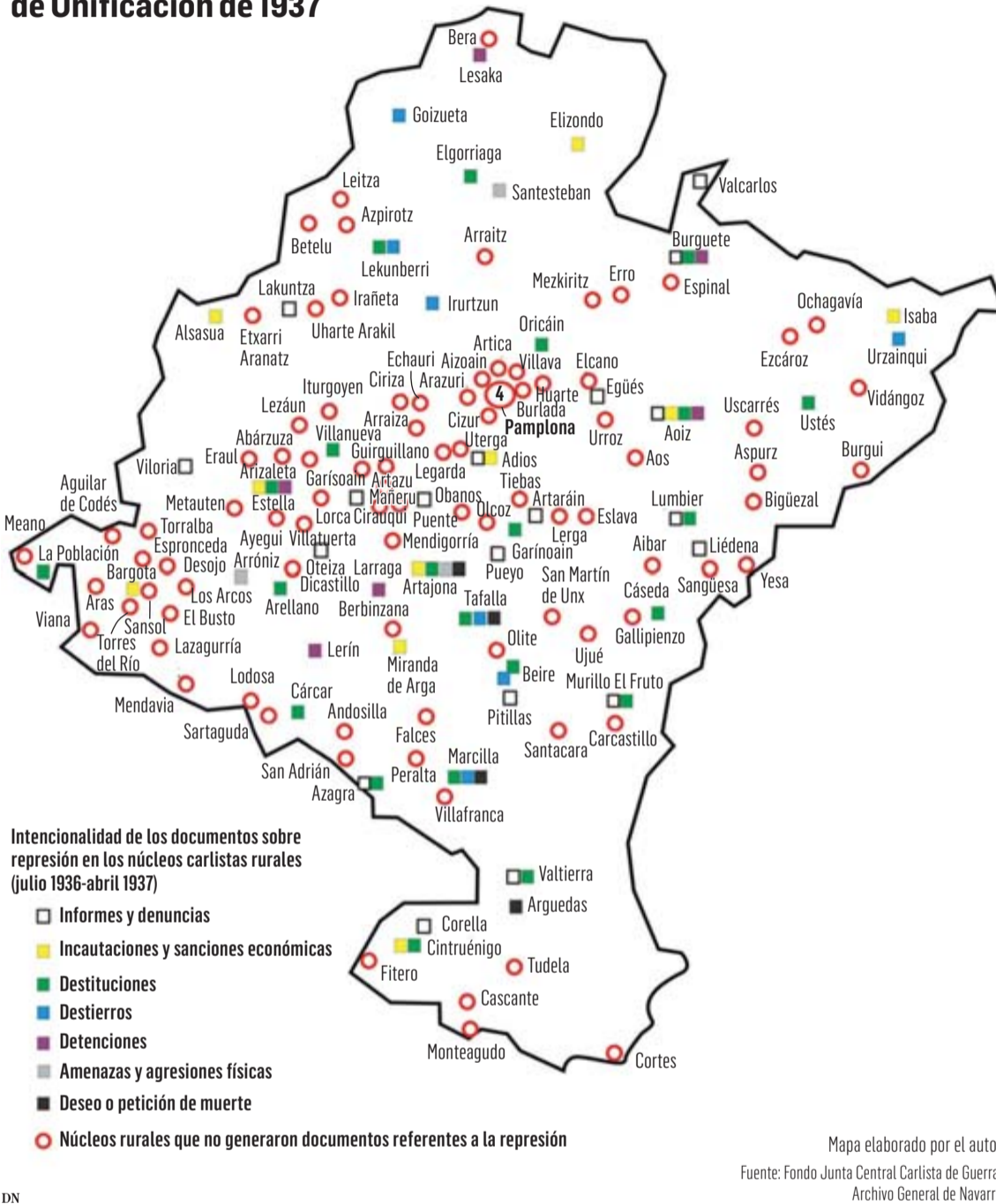
**L**A iniciativa de Izquierda-Ezkerra en el Parlamento Foral para cambiar los contenidos del Museo del Carlismo, atribuyendo de forma genérica la represión de retaguardia a este movimiento político, ha reabierto el debate sobre su implicación en la Guerra Civil. Queda fuera de toda duda la participación de carlistas en esos crímenes. El problema estriba en una generalización que no se corresponde con las distintas actitudes tomadas por amplios sectores del carlismo ante esos hechos de tanta trascendencia histórica.

En primer lugar, no puede confundirse la Junta Nacional Carlista de Guerra, liderada por Manuel Fal Conde y Javier de Borbón-Parma, con la denominada Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, que se constituye autónomamente, al margen de la primera y que actuó de forma independiente, llegando a desplazar al jefe regional, Joaquín Baleztena. La primera, la Nacional, fue desde el principio ninguneada por Franco y careció de poder efectivo para actuar. De hecho, sus principales dirigentes fueron víctimas de la animadversión que Franco no disimulaba hacia ellos: Fal Conde fue amenazado de muerte y desterrado a Portugal; Javier de Borbón-Parma, expulsado a Francia, donde después sería detenido por la Gestapo, y su secretario personal, el jefe carlista de Guipúzcoa, Antonio Arrúe, encarcelado en Granada. Todos ellos se opusieron al proyecto político de FET y de las JONS, que, por el contrario, aceptó la Junta de Navarra.

El principal enfrentamiento entre ambos organismos en lo que se refiere a la represión se debió a la propuesta de la Nacional para realizar un "canje general" en la zona norte que habría salvado cientos de vidas. Esta iniciativa contó con el apoyo del Reino Unido y la Cruz Roja Internacional pero fue abortada cuando la Junta navarra la denunció ante el Gobierno de Salamanca.

Tampoco se puede asociar miméticamente los núcleos carlistas existentes entonces en casi 150 localidades navarras con la citada Junta establecida en Pamplona, ya que, en realidad, no participaron en su constitución. De la copiosa correspondencia generada por estos núcleos existente en el Archivo General de Navarra, se deduce que en su mayor parte no alimentaron la maquinaria represiva. Concretamente, de 145 pueblos detectados con organización, medio centenar —una tercera parte— elaboran informes

## Mapa indicativo sobre la actitud represiva de los núcleos carlistas rurales antes del Decreto de Unificación de 1937



o reclaman medidas de distinta gravedad contra los militantes y simpatizantes del Frente Popular, como se puede apreciar en el gráfico adjunto.

Eso no quiere decir que en el otro centenar de localidades no hubiera casos de participación de carlistas porque hay datos y testimonios suficientes en sentido contrario, como por ejemplo en Etxarri-Aranatz, sino que la iniciativa no solía partir de esos núcleos rurales, verdadera base sociológica del carlismo. A ello hay que unir las 60 intercesiones por personas denunciadas, detenidas o cuya vida estaba en peligro.

Pero aún es más cuestionable atribuir de forma genérica la represión ejercida en Navarra a los miles de voluntarios que partieron a los frentes en los primeros días de la sublevación militar. Esos voluntarios, que lo fueron porque ya estaban organizados, integraban la práctica totalidad de la militancia carlista anterior a 1936. Estos militantes tampoco participaron en la constitución de la Junta de Pamplona y, cuando comenzaron los asesinatos,

muchos de ellos se encontraban ya combatiendo a cientos de kilómetros, sin siquiera tener información de lo que ocurría.

Se argumenta entonces, para justificar la generalización, que igualmente participaron en la represión en los pueblos que iban ocupando por toda la geografía nacional, presentando como prueba, a veces, hechos realmente espeluznantes sin la necesaria comprobación y rigor histórico.

### Es cuestionable atribuir la represión en Navarra a los voluntarios carlistas que partieron al frente

Uno de ellos, por ejemplo, se refiere a un macabro desfile en Teruel con "la bandera del tercio", confundiendo una "bandera (unidad militar equivalente al batallón)" de la Legión con la enseña carlista de un tercio de requetés. El desfile, exhibiendo despojos humanos, existió pero no eran requetés quienes desfilaban con su bandera sino un batallón de legionarios.

Otro ejemplo que se suele utilizar aún es más significativo por las connotaciones del crimen: abuso sexual y violación de enfermeras antes de obligarles a cavar sus propias tumbas. Ocurrió en el sanatorio psiquiátrico de Valdiedios (Asturias). Se atribuye este horrible crimen, probablemente de los más execrables de toda la guerra, a los requetés porque participaron las "Brigadas Navarras", para algunos sinónimo de "requetés", cuando estas grandes agrupaciones de combate, a veces de hasta 5.000 hombres, estaban formadas por unidades de distinta procedencia, entre ellas, aparte de tercios de requetés, numerosos batallones del Ejército regular y banderas

de Falange. En este caso, ninguno de los testimonios y obras que han tratado estos hechos citan la participación de requetés sino que todos coinciden en que fueron soldados pertenecientes al Batallón Arapiles nº 7.

También suele ser común, por el contrario, menospreciar los trabajos que no otorgan al requeté ese sanguinario carácter, como ocurre con la voluminosa obra sobre los tercios carlistas realizada por Julio Aróstegui, probablemente uno de los historiadores más acreditados en la materia y que fue, hasta su reciente fallecimiento, director de la Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid.

Tampoco se suelen estimar otros testimonios en la misma línea suministrados por protagonistas de aquellos acontecimientos, incluidas valoraciones del maquis en la posguerra más inmediata y hasta la realizada en el prólogo de la obra base para los trabajos sobre la represión en la comunidad foral —Navarra 1936. *De la esperanza al terror*—, cuando se refiere a quienes salieron "a los frentes bajo ideales que creyeron justos, ajenos a la barbarie desatada a sus espaldas". El prestigioso psiquiatra Carlos Castilla del Pino, represaliado en la dictadura por su militancia comunista, aún va más lejos asegurando, de primera mano, que los oficiales del requeté tenían orden de ejecuciones si no había juicio previo.

Tiene razón Izquierda-Ezkerra al exigir que se incluya "la represión de boina roja" en la muestra permanente del Museo, como también es preciso llenar otras lagunas y corregir aspectos no acordes con el avance de los estudios históricos. Resulta, por ejemplo, demasiado simplista, por no decir maniqueo, dividir la España a comienzos del siglo XIX entre "constitucionalistas revolucionarios" y "absolutistas reaccionarios", como si no hubiera otras opciones intermedias, en concreto el jovellanismo ilustrado que reivindica Vázquez de Mella, principal ideólogo tradicionalista. También falta una clara referencia al cada vez más cuestionado modelo de Estadonación, utilizado, a la postre, por la burguesía liberal para imponer su hegemonía social. Igualmente son ausencias llamativas el rechazo al Decreto de Unificación, la llamada Manifestación de Ideales contra el partido único (1938-1939) o el enfrentamiento del carlismo javierista con la dictadura.

Es, por lo tanto, necesario realizar esos cambios, siempre desde el rigor histórico, porque lo contrario haría un flaco favor a uno de los fundamentos de la Memoria Histórica: conocer la verdad; y lo peor que se puede hacer en un asunto de tal trascendencia y sensibilidad es intentar reparar una injusticia histórica con otra injusticia histórica.

Manuel Martorell es periodista e historiador